

Costa Rica: Una crisis política con sordina*

Manuel Rojas Bolaños

Sociólogo costarricense, profesor de la
Universidad de Costa Rica e investigador del
Centro de Estudios para la Acción Social (CEPAS)

Desde finales de la década anterior, Costa Rica, al igual que los demás países centroamericanos, entró en una etapa de abierta crisis económica. Los precios crecieron aceleradamente, al grado que la inflación alcanzó en 1982 el punto más alto en lo que va de la década: 81.8%. Los salarios promedio reales decrecieron aproximadamente en un 42% entre 1979 y 1982; el desempleo aumentó (8.5% para el desempleo abierto y 21.8% para la subutilización total de la mano de obra); la producción descendió hasta llegar al -7.3% en 1982; la moneda nacional, el colón, se devaluó cerca del 600%; las exportaciones y las importaciones descendieron ese año a niveles similares a los de la segunda mitad de la década anterior.

Sin embargo, la sociedad costarricense ha logrado conservar durante todos estos años una gran estabilidad política, sobre todo si se le compara con la situación del resto de los países del Istmo, desgarrados por profundas luchas intestinas. Esto no significa la ausencia de conflictos sociales ni de perturbaciones políticas, pero unos y otros han podido mantenerse dentro de los límites manejables para el sistema. En ese sentido es posible afirmar que en Costa Rica la crisis ha asumido, en el plano de lo político, una forma larvada.

* Ponencia presentada al VII Congreso Centroamericano de Sociología. Tegucigalpa, Honduras.

Esta estabilidad política relativa, o "estabilidad tendencial", como ha sido recientemente calificada (Dabène, 1985), no solamente oculta los conflictos, sino, sobre todo, las transformaciones que han venido ocurriendo, y que en el mediano plazo darán como resultado una nueva *forma* de Estado, diferente de la que emergió como producto de la crisis de los años treinta y los convulsos años cuarenta.

En ese sentido, la crisis de la sociedad costarricense no es sólo la crisis del patrón de acumulación que logró implantarse en el país después de 1948; es también la crisis —y quizá eso sea lo más importante— de una forma de Estado.¹

El Estado liberacionista

Después de 1948 se conformó una nueva forma estatal, que sustituyó al viejo Estado liberal. Una forma estatal que hemos denominado *Estado liberacionista*, por haber sido el Partido Liberación Nacional (PLN) su impulsor y su principal soporte político, dentro de un conjunto, por supuesto, de fuerzas sociales que constitufan su bloque de apoyo.

Las características fundamentales de dicha forma estatal son perfectamente conocidas:² en primer lugar, una activa participación en la promoción del crecimiento económico, buscando crear bases para nuevos ejes de acumulación, a través de la modernización del sistema financiero (en Costa Rica se llegó al extremo de la nacionalización bancaria); la creación de obras de infraestructura (vías de comunicación, generación de electricidad, etc.); la modernización de la agricultura (mejorando las prácticas culturales, introduciendo nuevas variedades dentro de los cultivos existentes e iniciando un proceso de diversificación agrícola);

impulsando un proceso de industrialización y, finalmente, adecuando todo el sistema de instituciones del Estado al nuevo patrón de acumulación de capital que se iba conformando.

Esta creciente participación del Estado se refleja en los siguientes datos: Los gastos del sector público se elevaron sustancialmente entre 1950 y 1980: en los años 1950-1957 el ritmo de crecimiento anual fue de 9.2%, entre 1958-1965 dicho crecimiento fue de 9.8%; entre 1966 y 1968 aumentó a 11.3%, hasta alcanzar en los años 1970-1980, una tasa de crecimiento del 27%. La participación del sector público en la formación bruta de capital fijo también aumentó en importancia en el periodo: en los años 1957-1960 la participación promedio en este renglón fue de 24.1%, mientras que en los años 1975-1978 esa participación fue de 32.3%. El empleo en el sector público, que en 1950 era del 6.2% del total, pasó a ser de 16% en 1973 y 19.6% en 1980. La tasa de participación del PIB generado por ese sector dentro del PIB total, pasó de 10.3% en 1950 a 21.5% en 1975. El aparato estatal se incrementó en 113 nuevas instituciones entre 1948 y 1980 (Ramírez, *et al.* 1982, págs. 307 y ss.).

Y la segunda característica de esta forma estatal era una sostenida preocupación por las llamadas funciones de legitimación. Esto significó la creación de nuevas instituciones y programas, y la orientación de un porcentaje elevado de los gastos del sector público hacia el gasto social: disminuyó la mortalidad infantil, aumentó la expectativa de vida al nacer y, en general, mejoraron sustancialmente las condiciones de salud de la población; asimismo, mejoraron los servicios educativos (un alto porcentaje del presupuesto nacional fue dedicado a la educación; éste osciló en los años 1950-1980, entre un 24% en 1965 y un 32% en 1975), y también recibieron atención los problemas de vivienda y de servicios básicos (*Ibidem*, págs. 234-254).

En resumen, la ejecución de un conjunto de políticas reformistas logró elevar sustancialmente el nivel de vida de amplios sectores sociales; se favoreció la canalización institucional del conflicto; se inhibió hasta cierto punto el desarrollo de fuertes organizaciones populares autónomas, mediante la cooptación de buena parte de la dirigencia de las organizaciones populares, misma que quedó enmarcada dentro del esquema político representado por el Partido Liberación Nacional.

Todo esto en el contexto de un crecimiento económico más o menos sostenido (cuando menos esa era la situación hasta principios de los setenta). El PIB creció un 6.7% en promedio en el periodo de 1950 a 1978, mientras que el promedio regional en esos mismos años fue de 5.3%. Los salarios crecieron moderada pero constantemente en ese lapso, mientras que la inflación fue

prácticamente inexistente. De ello resultó una población con niveles de vida relativamente altos, si se le compara con el resto de los países de la región; y una población acostumbrada a recibir una serie de beneficios provenientes de las instituciones estatales.

Finalmente, y en relación directa con lo anterior, entre 1948 y 1978 se produjo un perfeccionamiento de la democracia como forma de elección de las élites gobernantes. Se amplió considerablemente la participación electoral, en parte por la concesión del voto otorgado a las mujeres en la Constitución de 1949, y también debido a la posterior reducción de la edad necesaria para el ejercicio del voto, de 21 a 18 años; pero fundamentalmente gracias a la legitimidad adquirida por los procesos electorales, dados el peso de las políticas reformistas y el respeto observado hacia la voluntad



popular. Todo esto aunado a la existencia de un régimen de libertades públicas muy desarrollado y a la ausencia institucional del ejército.

El descalabro

Pero se había construido un gigante con pies de barro. Las contradicciones habían ido acumulándose en espera de una oportunidad para brotar. En realidad los límites de la modalidad de acumulación seguida y de la forma de Estado habían sido claramente delineados a principios de los años setenta, con la crisis del Mercado Común Centroamericano y el inicio de la crisis internacional; pero el estallido de la crisis en Costa Rica pudo ser postergado, en gran parte por el lanzamiento de un conjunto de políticas destinadas no solamente a bloquear la crisis, sino también a transformar el papel del Estado en la sociedad. Son éstos los intentos de desarrollar la actividad empresarial del Estado más allá de los ámbitos tradicionales.

A partir de 1978, los elementos detonantes confluyen: el gobierno de la República pasa a ser ejercido por una heterogénea coalición de fuerzas encabezada por Rodrigo Carazo, cuyo único punto de encuentro lo constituía el rechazo a la forma en que el PLN había venido conduciendo las instituciones del Estado, después de ocho años de permanencia en su dirección; pero que carecía de una alternativa claramente delineada frente al proyecto político que aquel partido había representado a lo largo de tantos años. Un proyecto político que ya mostraba inequívocos signos de agotamiento.

A ellos había que agregar el recrudecimiento de la crisis mundial y el estallido del conflicto regional, con efectos inmediatos en la economía y en la política nacionales.

En esas condiciones no era posible postergar por más tiempo el estallido de la crisis, y ésta hizo su aparición, con sus secuelas de inflación, desempleo, desvalorización salarial, descenso de la producción y trastorno general. En otras palabras, en los años 1978-1981 ocurrió el descalabro de la forma estatal que había emergido como producto de la crisis de los años treinta y de la Guerra Civil en 1948, y se inició el proceso de transición hacia otra.

El 8 de mayo de 1982 un nuevo gobierno del Partido Liberación Nacional inició sus funciones, presidido por Luis Alberto Monge, el candidato derrotado en las elecciones celebradas cuatro años atrás. De nuevo el PLN había alcanzado una resonante victoria, como en los viejos tiempos, con un alto porcentaje de votos: 58%. Pero la situación del país era muy diferente. Habían quedado atrás los años de bonanza y el país enfrentaba la peor crisis de toda su historia; una crisis que era en el fondo la crisis del proyecto político que el PLN había empujado a lo largo de 30 años. Los viejos esquemas tenían que ser abandonados, pero ¿cuál era la alternativa?³

El nuevo gobierno adoptó una estrategia de enfrentamiento a la crisis basada en un esquema simple: la ayuda económica externa, fundamentalmente la procedente de Estados Unidos. Dicha estrategia contemplaba también la regularización de las relaciones con los organismos financieros internacionales (con el FMI las relaciones estaban rotas desde 1981), y la renegociación de la deuda pública externa, que se había duplicado desde 1978 (durante el segundo semestre de 1981 el país se había declarado en mora).

Esta estrategia, que fue seguida cuidadosamente por el gobierno de Monge, marcó el inicio de una etapa diferente en el país, caracterizada por la creciente influencia del gobierno de Estados Unidos y de los organismos financieros internacionales, en la definición de



las políticas internas (económicas y sociales), y en el manejo de las relaciones exteriores, sobre todo en lo tocante a Nicaragua y al conflicto regional.

Desde entonces el país no sólo se ha vuelto económicamente más dependiente de Estados Unidos, sino que también su soberanía se ha visto limitada. A la vez se ha iniciado un proceso de cambio en el ámbito estatal, cuyas consecuencias reales no serán observables sino después de algunos años.

La crisis, con sus secuelas de empobrecimiento y agravamiento de los viejos problemas sin resolver, ha introducido modificaciones en la estructura de clases de la sociedad costarricense; ha delimitado fronteras y establecido claramente distancias otrora invisibles. Tales cambios se han visto reforzados por la orientación de la política económica, lo cual implica el fortalecimiento de

las actividades productivas dirigidas al mercado externo, en detrimento del mercado interno y, por supuesto, de los salarios; y por la reducción en los gastos de las instituciones del Estado dedicadas al desarrollo de programas de bienestar social.

La dualidad y el cambio

Hacia finales de 1982 el gobierno de Monge suscribió un primer convenio con el FMI, que le permitió disponer de un financiamiento por 90 millones de dólares; pero a cambio debió comprometerse a reducir el déficit fiscal del sector público a un 4.5% del PIB; limitar el uso gubernamental del crédito bancario; establecer una política conservadora de aumentos salariales, acorde con la varia-

ción de los precios de una canasta básica integrada inicialmente por unos pocos bienes y servicios; elevar las tasas de interés del crédito bancario; establecer un mecanismo de unificación monetaria y de devaluación; y elevar las tarifas de los servicios públicos.

Entre tanto, el gobierno pudo establecer una renegociación de la deuda externa con el llamado "Club de París" y con los bancos particulares (aproximadamente 150). Esto le permitió un respiro, y los problemas fueron trasladados para 1987; además, comenzó a recibir una copiosa ayuda económica por parte de Estados Unidos, que alcanzó un total de 642 millones de dólares entre ese año y 1985,⁴ en préstamos y donaciones diversas (Edelman, 1985, pág. 41). También ingresaron fondos provenientes de otras fuentes: por ejemplo, en 1985 el país recibió 154 millones de dólares (40 millones del Banco Mundial, 30 millones del FMI, 75 millones de bancos comerciales y 9 millones del Gobierno holandés), además de 160 millones provenientes de la AID. En conjunto, entre 1982 y 1985, según palabras del propio presidente del Banco Central, el Gobierno recibió un apoyo financiero por la suma de 2 mil millones de dólares; sin embargo, el 90% de esa suma se usó para cubrir las obligaciones externas del país (CEPAS, 1986, págs. 5).

La ayuda económica internacional, fundamentalmente la procedente de Estados Unidos, no solamente logró una cierta estabilidad económica para el país, sino que también ayudó a mantener viva la esperanza de una recuperación en los niveles de vida alcanzados en la etapa inmediatamente anterior al desencadenamiento de la crisis, con los consiguientes efectos apaciguadores sobre el conflicto social.

Para poder firmar un segundo acuerdo con el FMI, y suscribir un convenio con el Banco Mundial, el gobierno debió complacer nuevas exigencias: medidas para la reducción del empleo público y el déficit fiscal;

topes para el endeudamiento externo del sector público; limitación del crédito bancario a instituciones públicas; fortalecimiento del principio de centralización dentro del sector público; reducción de la protección arancelaria; fomento a las exportaciones; incentivos para la inversión externa; fortalecimiento de la autoridad presupuestaria; nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos; inicio de un proceso de privatización



de empresas productivas propiedad de un consorcio estatal (CODESA); y mayor apertura a las actividades de la banca privada.⁵

Este conjunto de medidas implican cambios importantes en el ámbito de acción de la esfera estatal. Sin embargo, no se puede afirmar que la administración Monge adoptara un enfoque estrictamente ortodoxo. Aprovechando la situación geopolítica del país, logró arrancar importantes concesiones a los prestamistas y donantes, "que dieron como resultado una especie de híbrido entre la visión ortodoxa de la economía y el modelo de desarrollo vigente en el país en el periodo anterior a la crisis" (CEPAS, 1985, pág. 6).

Por supuesto que también pesaba el temor a desatar un clima incontrolable de protesta social, como lo dejó entrever el movimiento contra las alzas de las tarifas eléctricas, ocurrido en junio de 1983, así como el pasado reformista de las principales figuras de gobierno.

Quizá por esa razón es que Monge, en el informe final rendido ante la Asamblea Legislativa el 1° de mayo de 1986, dijo lo siguiente:

Sin abandonar, en lo esencial, el modelo de desarrollo económico que concibió en la plenitud de su enorme capacidad intelectual ese Benemérito de la Patria que es Rodrigo Facio Brenes, en el amanecer de la lejana década de los años cuarenta, llevando posteriormente a la práctica en los decretos de la Junta Fundadora de la Segunda República y desarrollado en las administraciones de Don José Figueres, Don Francisco José Orlich y Don Daniel Oduber Quirós, en esta Administración me impuse la responsabilidad histórica de sentar las bases de la Costa Rica de la poscrisis y de hacerlo con realismo, objetividad y pragmatismo (*La Nación*, 020586-8A).

Declaraciones que reflejan bien la dualidad que le ha valido la crítica no sólo de la oposición neoliberal,

sino también de sectores de su propio Partido, incluyendo al propio presidente Arias, quien en su mensaje inaugural del 8 de mayo de 1986 señaló:

Con grandes sacrificios de nuestro pueblo, con una política económica realista y con el apoyo generoso de países amigos, fue posible lograr una estabilidad relativa. Ahora debemos recorrer un arduo y difícil camino de caminos profundos y ajustes impostergables en la economía nacional (*La Nación*, 090586-8A).

La dualidad también estuvo presente en el manejo de la política exterior durante la administración Monge, pues si por un lado el país aparecía en una posición de extremo alineamiento con Estados Unidos, por el otro se lanzaba la proclama de neutralidad, con la cual se pretendía evitar que Costa Rica se involucrara más en el conflicto regional.

Sin embargo, esa dualidad no debe hacernos perder de vista la realidad de los cambios que han venido ocurriendo, a los que se suman el reforzamiento del aparato represivo y la ampliación del control ideológico de la población. En efecto, con el pretexto de la defensa del territorio nacional frente a reales o supuestas agresiones externas y acciones desestabilizadoras internas, los cuerpos represivos costarricenses, que otrora tenían un carácter policial, han pasado por un acelerado proceso de transformación desde 1982, gracias a la ayuda estadounidense.

Entre 1962 y 1979 la asistencia militar estadounidense fue apenas de 6.9 millones de dólares; entre 1982 y 1985 aumentó a 23 millones de dólares, aproximadamente (Edelman, 1985, pág. 41). Se estableció un campo de entrenamiento en la hacienda El Murciélagos, cerca de la frontera con Nicaragua; se han reorganizado los cuerpos de la Guardia Civil y la Guardia Rural, y se les ha dotado de equipo apropiado para las labores de vigilan-

cia de frontera y contrainsurgencia. Asimismo, se han mejorado los sistemas de inteligencia.

Paralelamente, la población sufre el constante bombardeo de los medios de información, que distorsionan la realidad del conflicto regional, crean falsos enemigos internos y externos (por ejemplo, los conflictos laborales y campesinos son presentados como parte de un plan de desestabilización), promueven la xenofobia (particularmente contra todo lo centroamericano)⁶ y equiparan la defensa de la democracia con la defensa de los valores de la libre empresa. Como consecuencia de la crisis regional y de su cercanía en Nicaragua, Costa Rica vive hoy un auge del pensamiento neoconservador. Se han establecido dos editoriales para la divulgación de este pensamiento, con la ayuda estadounidense, y en general, toda la actividad de los grandes medios de comunicación está enmarcada dentro de él.⁷

Democracia y estabilidad política *in abstracto*, son presentados como valores intrínsecos de la nacionalidad costarricense, frente a pueblos que, dentro de esa visión, estarían acostumbrados a solventar sus conflictos por la vía de la violencia abierta. En el fondo lo que se maneja es el par civilización-barbarie, con las consecuencias ideológicas y políticas esperables.

¿Un camino sin retorno?

En tal contexto se desarrollan las elecciones del domingo 2 de febrero de 1986. Como era de esperarse, los costarricenses acudieron masivamente a las 6 751 urnas electorales establecidas a lo largo y a lo ancho de este pequeño país, de 511 mil kilómetros cuadrados y poco más de 2.5 millones de habitantes. En un ambiente plagado de banderas —y de aparente tranquilidad—, fueron depositados los votos por el candidato de su

preferencia, en las elecciones que normalmente se realizan cada cuatro años para elegir presidente de la República, vicepresidentes, diputados y municipales.

De 1 486 474⁸ votantes potenciales (el 50.4% hombres y el resto mujeres), votaron 1 216 300, lo que arroja un porcentaje de abstencionismo de 18.2%. Del total de votos válidos para presidente (1 185 222), el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Arias Sánchez, resultó triunfador, con el 52.3% de los votos, frente a un 45.8% alcanzado por el candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rafael A. Calderón.

Los restantes cuatro candidatos, entre los que se contaban dos de izquierda: Rodrigo Gutiérrez, de Alianza Popular, y Álvaro Montero, de la Coalición Pueblo Unido, apenas alcanzaron el 1.9% del total de votos válidos, lo que señala un desmedido apoyo para las fórmulas tradicionales de la política costarricense.

En lo que se refiere a diputados, también el PLN obtuvo una aplastante victoria, con el 47.8% del total de votos válidos, fueron elegidos 29 de sus diputados, de un total de 57; mientras que el PUSC logró 25 diputaciones, y las dos agrupaciones de la izquierda y el Partido Agrícola Cartaginés, uno cada uno.

Una vez más la sociedad costarricense había dado muestras de la legitimidad de la democracia como forma de elección de sus gobernantes, en medio de la peor crisis económica de su historia. Como cada cuatro años, se había cumplido con el ritual establecido, pero esta vez había adquirido el carácter de un exorcismo colectivo y el futuro se veía con optimismo, libre de los demonios de la miseria, el desempleo, la violencia y la incertidumbre. El gobierno saliente había proclamado la muerte de la crisis; el nuevo anunciaba un futuro promisorio. Pero las expectativas de mayor bienestar pronto se estrellarían contra el muro de las duras realidades.

Dos meses después de haber iniciado su gestión, el gobierno de Arias hizo públicos los lineamientos de su política económica y social: aparentemente había tomado la determinación de avanzar por el camino de los ajustes estructurales, profundizar los cambios y completar el proceso iniciado en 1982.

Según declaraciones de los dirigentes de la política económica,⁹ se trata de variar la orientación intervencionista del Estado prevaeciente en el periodo anterior, eliminando el proteccionismo para la producción dirigida hacia el mercado interno, pero creando a la vez un conjunto de estímulos para la producción dirigida hacia el mercado extrarregional: reducción de los impuestos a las empresas, una política salarial aún más restrictiva que en la administración anterior (aumentos basados en el crecimiento de la producción y en el índice de precios), y una modernización de todos los mecanismos gubernamentales que tienen que ver con la exportación de productos.

Estas medidas irían acompañadas por una reducción del gasto estatal y una revisión de sus funciones, con el fin de privatizar una serie de servicios que hasta ahora han estado a cargo de instituciones estatales; desde la salud hasta la educación, pasando, por supuesto, por actividades sumamente rentables, como la Fábrica Nacional de Licores, que tiene más de 100 años de existencia y que constituye una especie de símbolo del poder y de la actividad empresarial del Estado costarricense.¹⁰

Una nueva forma de intervencionismo estatal, sin la pesada carga de la veta "distribucionista", que fue uno de los elementos clave para la preservación de la paz social y la estabilidad política en el periodo de 1948 a 1978. Como lo señaló el Ministro de Hacienda, Fernando Naranjo, en un discurso pronunciado el 8 de julio de 1986:

El país no puede soportar por más tiempo la enorme carga que significan instituciones y programas desactualizados, que fueron importantes en el pasado pero hoy no se justifican, a causa de la situación imperante (*La Nación*, 090786-16 A).

Pero, ¿cuáles son las posibilidades de avanzar más por este camino? La profundización de las tendencias goza, por supuesto, del apoyo de los organismos financieros internacionales y de los empresarios locales¹¹ y de sus socios extranjeros. Pero existe desacuerdo sobre la "velocidad" del cambio, tanto porque ciertos intereses empresariales podrían verse muy afectados, como por la reacción que podría desencadenarse en los sectores populares. La inserción de los sectores populares dentro de este nuevo modelo de acumulación y de esta nueva forma estatal, parece ser un problema básico.

Después de más de seis años de crisis, con sus secuelas de inflación, desempleo y desvalorización salarial, los sectores populares no parecen estar muy dispuestos a soportar mayores restricciones; la situación se complica más debido a las expectativas de mejoramiento inmediato de la situación despertadas por el mismo Óscar Arias durante la campaña electoral.

En los últimos tres meses el nivel de conflictividad ha tendido a elevarse, dadas las medidas anunciadas y ejecutadas por el gobierno, como los aumentos en precios de productos básicos y las restricciones impuestas a la ratificación de convenciones colectivas de trabajo en el sector público. Sin embargo, el movimiento popular sigue acusando una gran dispersión y una ausencia de dirección, lo que posibilita las acciones gubernamentales para el aislamiento y control de los segmentos.

Recientemente el gobierno propuso un diálogo nacional y una concertación social con los empresarios y los sectores laborales. Pero ¿qué se ofrece a cambio?

Las promesas de 80 mil soluciones de vivienda en los próximos cuatro años, la creación de 25 mil nuevos empleos y, en general, de mejores condiciones de vida para el futuro, no bastan para solucionar los problemas cotidianos ni mucho menos para avalar la política económica y social anunciada por el gobierno.

Lo sucedido el 17 de septiembre de 1986 en la Avenida Central de San José, donde se reprimió violentamente una manifestación de campesinos que protestaban por las restricciones impuestas para la siembra de granos básicos (maíz, frijoles) y solicitaban una política agropecuaria nacionalista, es una muestra clara de los límites de la propuesta de concertación social.

Sin embargo, el peso del pasado y la lucha de clases constituyen un obstáculo para realizar aceleradamente los "ajustes impostergables" de que hablan los

altos funcionarios del gobierno;¹² pero ¿podrá la persistencia de alguna forma de dualidad impedir la acumulación del cambio antes de llegar a un punto irreversible?

Es aún temprano para hacer aseveraciones en ese sentido; todo depende de la evolución de los acontecimientos tanto en el plano nacional como en el regional. No obstante, es razonable esperar que la crisis política que en forma velada ha venido sufriendo la sociedad costarricense, se manifieste abiertamente en los próximos tiempos, al comenzar a ser observadas las consecuencias sociales y políticas de la estrategia seguida hasta ahora para enfrentar la crisis, abriendo de esa forma el camino para la discusión de una alternativa viable a la visión neoliberal de la economía y al Estado que trata de imponerse.

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS, 1980-1985

Indicadores	1980	1981	1982	1983	1984	1985 ¹
PIB ²	0.8	-2.3	-7.3	2.9	7.5	2.2
Agropecuaria	-0.5	5.1	-4.7	4.0	7.3	1.2
Industrial	0.8	-0.5	-11.4	1.8	11.6	2.7
Construcción	-1.1	-21.7	-31.9	4.7	22.6	9.7
Comercio	-3.0	-10.6	-11.7	3.2	11.5	2.0
Otros sectores	3.7	0.6	0.9	2.3	2.3	1.8
Tasa desempleo abierto ³	5.3	8.3	8.5	7.9	6.7	6.2
Tasa subutilización total ³	13.5	17.2	21.8	18.1	15.4	14.6
Precios al consumidor ⁴	17.8	65.1	81.8	10.7	17.3	10.9
Precios al por mayor ⁴	19.3	117.2	79.1	5.9	12.2	7.6
Salario real promedio ⁵	8.621	7.302	5.535	6.592	7.462	8.059
Salario real mínimo ⁵	4.848	4.440	4.139	4.843	5.051	5.470
Exportaciones (FOB) ⁶	1.001.7	1.008.1	870.4	872.5	975.6	927
Importaciones (CIF) ⁶	1.523.8	1.208.5	893.2	-987.8	-1.093.7	-1.103.5
Saldo ⁶	-522.1	-200.4	-22.8	-115.3	-118.1	-175.6
Deuda pública externa ⁶	2.254.2	2.732.7	3.116.7	3.183.5	3.419.4	3.693.5

1. Cifras preliminares.
2. Variación porcentual.
3. Tasas anuales promedio.
4. Variación porcentual de dic. a dic. de cada año.
5. En colones por mes, a precios constantes de 1985.
6. En millones de dólares estadounidenses.

Fuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

Notas

- 1 Siguiendo a J. Graciarena (1984-1945), entenderemos "como crisis de una forma de Estado solamente las situaciones de transformación, mutación o cambio estructural que enfrenta una forma singular de éste y que no puede resolver apelando a sus recursos normales. Por tanto, la superación de la crisis supone más que eso, es consustancial con la propia transformación formal del Estado".
- 2 Guardando las distancias históricas, las características son similares a las de los Estados denominadas desarrollistas en América Latina, inspirados "por la doctrina keynesiana y siguiendo las recetas cepalinas", como lo señala el mismo Graciarena (1984, pág. 60).
- 3 Después de 1978, el PLN ha vivido una especie de vacío programático, vacío que lentamente ha comenzado a llenarse con elementos tomados de la visión neoliberal de la sociedad y de la economía. En ese sentido el marbete de socialdemócrata para este partido no deja de ser un anacronismo.
- 4 Años fiscales de Estados Unidos. El 72% de ese total aparece bajo el rubro "Fondos de apoyo económico", que son utilizados para programas de estabilización a corto plazo y que son otorgados a países estratégicamente prioritarios.
- 5 Este conjunto de medidas están contenidas en los convenios suscritos con el FMI y el Banco Mundial, en la "Ley para el equilibrio financiero del sector público", en la "Ley de las prórrogas y los nuevos ingresos" y en las reformas a la "Ley de la moneda" y a la "Ley orgánica del Banco Central".
- 6 En esto también está influyendo la presencia de los refugiados. Entre 1978 y 1986 (datos al 31 de marzo) el país ha recibido 26 mil 978 personas en calidad de refugiados; pero entre desplazados e indocumentados se estima que el número total asciende a 200 mil personas.
- 7 Además, se ha establecido una repetidora de La Voz de América cerca de la frontera con Nicaragua.
- 8 Del total de votantes potenciales, el 68.1% lo conformaban personas entre los 18 y los 39 años de edad. En Costa Rica el 49% de la población, aproximadamente, vive en áreas urbanas; el resto en áreas rurales.
- 9 Estos funcionarios aparentemente buscan enmarcar la política económica dentro de una visión de "economía hacia la oferta" (CEPAS, 1986, pág. 15 y ss.).
- 10 La fabricación de alcohol ha sido hasta ahora monopolio estatal.
- 11 El término "empresarios locales" resulta ambiguo, pues no refleja el peso del capital extranjero en las diversas ramas locales de producción.
- 12 A raíz de la manifestación campesina del 17 de septiembre, el gobierno se vio obligado a poner en marcha un plan agropecuario que en cierta medida implica un retroceso con respecto a las intenciones de avanzar por el camino de los ajustes estructurales.

Bibliografía

- CEPAS, *Costa Rica: Balance de la situación*, núm. 15, abril-mayo de 1986.
- Dabéne, Olivier, "En torno a la estabilidad política de Costa Rica: tres paradigmas, dos conceptos, una fórmula", *Anuario de Estudios Centroamericanos*, núm. 12 (1), 1986, págs. 41-52.
- Edelman, Marc, "Back from the Brink", *NACLA: Report on the Americas*, volumen XIX, núm. 6, noviembre-diciembre 1985, págs. 37-48.
- Graciarena, Jorge, "El Estado latinoamericano en perspectiva, figuras, crisis, prospectiva", en *Pensamiento Iberoamericano*, núm. 5, enero-junio de 1984, págs. 39-74.
- Ramírez, Edwin [et al.], *Evolución socioeconómica de Costa Rica, 1950-1980*. San José: OFIPLAN-UNED, 1982.
- Sojo, Ana, "Morfología de la política estatal", en *Estudios Sociales Centroamericanos*, núm. 37, enero-abril 1984, págs. 139-162.

